



Resolución No. CSJBOR23-1233
Cartagena de Indias D.T. y C., 4 de octubre de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No.: 13001-11-01-001-2023-00730-00

Solicitante: Rodolfo Miranda Barros

Despacho: Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena

Funcionario judicial: Mónica Patricia Elles Mora y Sandra Velásquez Arteaga

Clase de proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

Número de radicación del proceso: 13001-33-33-014-2022-00194-00

Magistrada ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión: 4 de octubre de 2023

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

El 8 de septiembre del 2023, el doctor Rodolfo Miranda Barros, actuando como apoderado de la parte demandante, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado No. 13001-33-33-014-2022-00194-00, que se adelanta en el Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, solicitó vigilancia judicial administrativa, debido a que según lo afirma, desde 11 de mayo de 2023, se encuentra pendiente emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de aplicar la figura de sentencia anticipada.

2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-C17 del 13 de septiembre de 2023, se dispuso requerir a las doctoras Mónica Patricia Elles Mora y Sandra Velásquez Arteaga, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, acto administrativo que fue comunicado mediante mensaje de datos el 25 de septiembre de 2023.

3. Informe de verificación de los servidores judiciales requeridos

Dentro de la oportunidad respectiva, las doctoras Mónica Patricia Elles Mora y Sandra Velásquez Arteaga, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, rindieron el informe solicitado en similares términos y afirmaron bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011); que: i) por auto del 19 de enero de 2023, el despacho admitió la demanda de la referencia, por lo que se procedió con la notificación personal de la parte demandada y se esperó al vencimiento de los términos para contestar y reformar la demanda; ii) que el expediente se asignó para trámite y luego se ingresó al despacho, y por auto del 11 de septiembre de 2023, se resolvió abstenerse de dar inicio al trámite para proferir sentencia anticipada, y se fijó fecha de audiencia inicial, actuación notificada a las partes el 13 de septiembre siguiente; iv) que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 175 *ibidem*, introducido por el artículo 38 de la Ley 2080 del año 2021, la solicitud de sentencia anticipada debe estudiarse en la oportunidad para resolver excepciones previas; y v) que la posibilidad de proferir sentencia anticipada es facultativa del juez, y en el caso en concreto no se configuran motivos para ello.



SC5780-4-4

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Rodolfo Miranda Barros, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia. Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial para la vigencia 2023 – 2026¹, el cual en su objetivo estratégico No. 1, prevé como pilar esencial optimizar los tiempos de respuesta dentro de los procesos judiciales, con el fin de garantizar un mayor acceso a los usuarios del servicio de administración de justicia.

Así las cosas, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra el servidor judicial determinado.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “para que la justicia se administre oportuna y eficazmente” y que “es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

Ahora bien, en este punto es pertinente resaltar que el artículo 14 del Acuerdo en mención, prescribe: “Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”. Dicha norma se encuentra en armonía con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 4° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas.

En consecuencia, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, es de naturaleza administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria en contra de

1

<https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan+Sectorial+de+Desarrollo+Ram+a+Judicial+2023-2026.pdf/4f58367d-864c-490e-b4b2-69542ff0295e>

servidores judiciales y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

4. Caso concreto

El doctor Rodolfo Miranda Barros, actuando como apoderado de la parte demandante, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, que se adelanta en el Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, solicitó vigilancia judicial administrativa, dado que según lo afirma, desde 11 de mayo de 2023, se encuentra pendiente emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de aplicar la figura de sentencia anticipada.

Frente a las alegaciones del solicitante, las doctoras Mónica Patricia Elles Mora y Sandra Velásquez Arteaga, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, afirmaron bajo la gravedad de juramento que mediante providencia del 11 de septiembre de 2023, el despacho emitió pronunciamiento respecto de la solicitud alegada, y fijó fecha de audiencia, actuación notificada en estados el 13 de septiembre del año en curso.

Examinada la solicitud de vigilancia judicial, el informe rendido por las servidoras judiciales bajo la gravedad de juramento y revisado el expediente digital allegado, esta Corporación encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Auto por el cual se admite la demanda de la referencia	19/01/2023
2	Notificación en estados del auto del 19/01/2023	23/01/2023
3	Notificación personal de la demanda a la parte accionada	26/01/2023
4	Memorial por el que se solicita proferir sentencia anticipada	11/05/2023
5	Impulso procesal	29/06/2023
6	Impulso procesal	12/07/2023
7	Impulso procesal	14/08/2023
8	Auto por el cual se resuelve abstenerse de dar inicio al trámite al trámite de sentencia anticipada	11/09/2023
9	Notificación en estados del auto del 11/09/2023	13/09/2023
10	Comunicación del requerimiento dentro del presente trámite administrativo	25/09/2023

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta tardanza en la que se encuentra incurso el Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena en emitir pronunciamiento sobre la solicitud de aplicar la figura de sentencia anticipada.

En este sentido, se observa que, según el informe rendido bajo la gravedad de juramento por las servidoras judiciales requeridas, se advierte que el despacho encartado mediante providencia del 11 de septiembre de 2023, resolvió abstenerse de dar inicio al trámite para proferir sentencia anticipada y fijó fecha de audiencia, actuación notificada en estados el 13 de septiembre siguiente; esto, con anterioridad a la comunicación del requerimiento elevado por esta Seccional dentro del presente trámite administrativo, la cual se realizó el 25 de septiembre hogaño.

Amén de lo anterior, en el presente caso no es posible alegar la existencia de mora judicial presente, como quiera que para el momento en que se comunicó el requerimiento de rendir informe dentro del trámite de vigilancia judicial administrativa, se había efectuado con anterioridad el trámite alegado. Esto impide seguir adelante con este trámite, pues de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, *“por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996”*, se infiere razonablemente que la finalidad de esta

actuación es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia en caso de sucesos de mora presentes, no en los pasados.

Ahora, al realizar un estudio de lo informado por el funcionario judicial requerido, se tiene que entre la presentación de la solicitud alegada el 11 de mayo de 2023, y el auto que emitió pronunciamiento al respecto del 11 de septiembre de 2023, transcurrieron 80 días hábiles, obstante, al no contar con la fecha del pase al despacho por parte de la secretaría, no puede determinarse si la demora le corresponde a esta por pase tardío según lo establecido en el artículo 109² del Código General del Proceso, o a la jueza para proferir su decisión según el artículo 120³ ibidem, normatividad aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 306⁴ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al no tener constancia de la fecha de pase al despacho, se asumirá que este se efectuó a tiempo por parte de la secretaría, por lo que la mora alegada estaría en cabeza de la jueza del despacho encartado.

Por ello, frente al tiempo transcurrido, esta Corporación pasará a verificar la información estadística reportada en la plataforma estadística SIERJU respecto del período en el que se presume la mora.

PERÍODO	INVENTARIO INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	EGRESOS	INVENTARIO FINAL
1° Semestre 2023	536	287	37	69	717

Se tiene que la carga efectiva es igual a inventario inicial más ingresos menos salidas, por lo que en el caso del despacho se tiene para el período relacionado:

Carga efectiva para el 1° semestre del año 2023 = $(536 + 287) - 37$

Carga efectiva para el 1° semestre del año 2023 = 786

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado Administrativo - Sin Secciones para el año 2023 = 431 (Acuerdo PCSJA23-12040 de 2023)

Con base en las estadísticas anteriormente relacionadas, y teniendo en cuenta que la mora inició en el año 2023, se encuentra que en el tiempo analizado, la funcionaria judicial laboró con una carga efectiva equivalente al 182,37% sobre la capacidad máxima de respuesta establecida para el año 2023, de lo que se colige la situación del despacho en cuanto a sus cargas laborales.

Debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura ha definido la “capacidad máxima de respuesta” como punto de referencia para establecer el número límite de procesos que pueden ser atendidos por un juzgado o despacho de magistrado, atendiendo a la capacidad humana y logística con la que cuente dicha oficina para responder a la demanda de justicia; en el caso particular del Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, se tiene de su carga laboral que superó el límite establecido por dicha Corporación, lo que demuestra la situación de congestión del Despacho.

² ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.

³ ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin. (...).

⁴ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Igualmente, al consultar la producción del despacho judicial en el período estudiado con anterioridad, se obtuvo el siguiente resultado:

PERÍODO	AUTOS INTERLOCUTORIOS	SENTENCIAS	PROMEDIO DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR DÍA
1° semestre de 2023	544	58	5,33

Según el criterio esbozado por Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mora sancionable en los funcionarios judiciales será aquella en la que quede demostrado que ha sido la negligencia la que ha reinado y no el trabajo, que a pesar de arduo, no dé el fruto esperado por las partes interesadas en el proceso. Así lo dispuso esa colegiatura en sentencia dentro del proceso No. 110010102000200202357:

“(…) lo anterior conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala que ha considerado que una de las formas en que se exteriorizan o materializan los esfuerzos de los funcionarios por evacuar su trabajo dice relación con la concreta producción laboral que registra estadísticamente. Para probar tal hecho, esta colegiatura ha convenido entonces en determinar como mínimo uno (1) el número diario de providencias de fondo (sentencias y autos interlocutorios) para mediante un proceso de confrontación con el tiempo hábil específicamente laborado establecer si en cada caso concreto es viable predicar esmero y dedicación en la ejecución de sus tareas propias de su función, y así considerar la excesiva carga de trabajo como la causa irresistible de la mora (…)”.
(Subrayado fuera del texto original).

Se tiene entonces, de la aplicación de la fórmula propuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el período en el que se presume la mora, que la funcionaria judicial presentó una producción superior a la mínima determinada, tal y como se desprende del cuadro señalado en líneas precedentes, cifras que, como producción laboral del despacho supera la establecida por esa sala. Por lo que, bajo ese supuesto, no habría lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora Mónica Patricia Elles Mora, Jueza 14° Administrativo del Circuito de Cartagena.

Debe precisarse que la posición adoptada por esta seccional, no puede ser interpretada como una anuencia al incumplimiento de los términos judiciales por parte de los operadores de justicia; por el contrario, obedece a un conjunto de situaciones objetivas que implica un estudio de los escenarios donde se desarrollan los debates procesales, los cuales están sometidos a situaciones tales como el exceso de trabajo o la congestión judicial, que le impiden al juez, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, cumplir con los términos fijados en la ley, lo que a la postre causa una mora en la solución de los asuntos sometidos al conocimiento del respectivo despacho; y por lo tanto cuando se advierta la concurrencia de estos presupuestos fácticos, habrá lugar a justificar la mora judicial.

En conclusión, y como quiera que no existe una situación de mora injustificada por parte del despacho encartado, pues se demostró que la tardanza ha obedecido a la carga laboral soportada, esta Corporación dispondrá al archivo del presente trámite administrativo.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

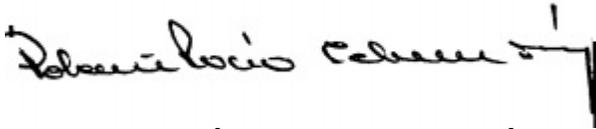
III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Rodolfo Miranda Barros, actuando como apoderado de la parte demandante, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado No. 13001-33-33-014-2022-00194-00, que se adelanta en el Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al peticionario, y a las doctoras Mónica Patricia Elles Mora y Sandra Velásquez Arteaga, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 14° Administrativo del Circuito de Cartagena.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

MP. PRCR/MIAA